



REPÚBLICA DE COLOMBIA
Rama Judicial del Poder Público



SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, nueve (9) de diciembre de dos mil veinte (2020)

SENTENCIA

Magistrada Ponente: María Eugenia Gómez Velásquez

Proceso : Ordinario de Segunda Instancia
Demandante : JUAN BERNARDO AGUDELO
Demandada : ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES -
Radicado : 05001-31-05-004-2018-00152-01
Temas y Subtemas : Seguridad Social – Pensión especial de vejez por alto riesgo -
Decisión : Confirma decisión condenatoria
Sentencia No : 188

En la fecha antes anotada, el **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL**, conformada por los Magistrados **CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES, NANCY GUTIÉRREZ SALAZAR y MARÍA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ**, como ponente, profieren la siguiente decisión de fondo, previa deliberación, de conformidad con lo establecido en el Decreto Legislativo N° 806 del 4 de junio de 2020, *“Por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”*, que modificó el trámite en los procesos de la jurisdicción Laboral.

ANTECEDENTES

Pretensiones:

Se solicita se condene al reconocimiento y pago de **pensión especial de vejez por alto riesgo**, desde el **1º de julio de 2012**, cuando cumplió requisitos conforme al Decreto 2090 de 2003, mesadas adicionales, indexación, **intereses moratorios** del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, costas procesales.

Hechos relevantes:

Se afirma en la demanda que **el señor Juan Bernardo Agudelo prestó servicios** personales durante más de 18 años, **desde febrero de 1984 hasta junio de 2002, a Industrial Hulleras S.A. y Mineros Unidos S.A., en actividades de alto riesgo en minería de socavón**; se encuentra afiliado al Régimen de Prima Media con Prestación Definida desde el 24 de junio de 1981; reclamó la pensión especial de vejez por alto riesgo el 18 de julio de 2017 sin que hubiera sido resuelta la petición; sostiene que es obligación de Colpensiones vigilar que el valor cotizado para pensiones obedezca a las reales actividades desarrolladas por el trabajador y que **el hecho de no haberse cotizado los puntos adicionales por parte de Industrial Hulleras S.A. y Mineros Unidos S.A., a partir del 22 de junio de 1994, no es responsabilidad del trabajador**, situación que no exime a la entidad de seguridad social de reconocer y pagar la pensión de vejez de alto riesgo; agrega que la obligación de realizar la cotización especial adicional solo surgió a partir del 23 de junio de 1994, cuando entró en vigencia el Decreto 1281 de 1994, por lo que el tiempo laborado con anterioridad en actividades catalogadas como de alto riesgo, en minería de socavón, debe tenerse en cuenta para el cómputo de semanas. Explica que celebró audiencia de conciliación el día 8 de febrero de 2008 en la Dirección Territorial de Antioquia del Ministerio de la Protección Social, con el Representante Legal de Industrial Hulleras S.A. en Liquidación y con el apoderado especial de Cementos Argos S.A., donde ésta última se subrogó en todos los derechos del trabajador, comprometiéndose a pagar al I.S.S. el valor de las cotizaciones por actividad de alto

riesgo, hasta el momento de la terminación del contrato, esto es, hasta el 1º de junio de 1998 respecto de Industrial Hulleras S.A. y hasta el 4 de junio de 2002 con Mineros Unidos S.A.

Respuesta a la demanda:

COLPENSIONES aceptó lo referente a la edad del demandante y su afiliación a la entidad, la reclamación de la pensión especial de vejez por alto riesgo, la conciliación referida; expuso que las facultades de cobro existen para las obligaciones de las que tenga conocimiento la entidad y que frente a los actos de elusión en la afiliación o reportes inexactos es el empleador quien debe responder por las prestaciones. Se opuso a la prosperidad de las pretensiones y propuso las excepciones denominadas inexistencia de la obligación, incompatibilidad de intereses moratorios e indexación, prescripción, compensación, imposibilidad de condena en costas (folios 45 a 49).

Sentencia de Primera Instancia:

El **Juzgado Cuarto Laboral** del Circuito de Medellín, **condenó a COLPENSIONES a reconocer y pagar pensión especial de vejez** al señor Juan Bernardo Agudelo, en forma **vitalicia, a partir del 18 de julio de 2014**, con **13 mesadas** al año, con afiliación obligatoria al Sistema de Salud y **descuentos retroactivos con destino a este sistema**; ordenó a COLPENSIONES a calcular la mesada pensional, sin que pueda ser inferior al **SMLMV**, conforme a lo establecido en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, con los últimos diez (10) años de cotización o toda la vida laboral, la que sea más favorable, aplicando la fórmula establecida en el artículo 34 de la Ley 100 de 1993 para obtener el valor de la mesada; **intereses moratorios** del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, **a partir del 18 de noviembre de 2017**, sobre cada mesada pensional, a la tasa máxima de interés moratorio vigente al momento del pago; declaró probadas las excepciones de incompatibilidad entre intereses moratorios e indexación y **parcialmente la de prescripción**; condenó en

costas a COLPENSIONES, fijando como agencias en derecho la suma de **\$3.312.464** equivalente a 4 SMLMV a favor del demandante.

En términos generales, consideró el Juez de Primera Instancia, que el demandante cumple con los requisitos legales para tener derecho a la prestación económica, conforme a lo exigido en el **Decreto 2090 de 2003**, por contar en **total con 1666 semanas cotizadas al Sistema General de Pensiones**, de las cuales, **941 lo fueron por actividades de minería subterránea en socavón**; cumplió la edad mínima de **55 años en 2017** y de acuerdo al número de semanas con cotización especial en exceso a las primeras 700, tiene derecho a **disfrutar** la pensión desde **cuando cumplió 51 años de edad el 1º de julio de 2013**, pero como **reclamó el 18 de julio de 2017**, quedaron afectadas por **prescripción** las mesadas pensionales causadas antes del **18 de julio de 2014**. **Concedió intereses moratorios** al encontrar que la entidad no tuvo ninguna justificación para no reconocer la pensión de vejez, reconocidos a partir del **18 de noviembre de 2017**, cuando venció el término de cuatro (4) meses para resolver, contado desde la reclamación administrativa.

Recurso de Apelación apoderado de COLPENSIONES:

Se opone al reconocimiento de intereses moratorios, por cuanto COLPENSIONES se ajustó a la Ley, mal haría en reconocer una pensión que no se había causado, actuó de buena fe y conforme a derecho; tuvo que realizarse la audiencia para determinar la permanencia del demandante en el estado de peligrosidad, también había duda respecto a las fechas de cotización.

Alegatos de conclusión:

La apoderada de COLPENSIONES solicita se revoque la Sentencia de Primera Instancia, afirmando que el demandante no cumple la densidad de semanas exigidas, por cuanto según certificación aportada con la demanda, de fecha 6 de diciembre de 2016, el demandante prestó sus servicios para Industrial Hullera desde

el 21 de febrero de 1984 al 1° de junio de 1998 y de este tiempo, ejerció en labores de alto riesgo desde el 10 de febrero de 1992 al 1° de junio de 1998, que corresponde a 290.78 semanas, por lo que no cumple con los requisitos del Decreto 2090 de 2003. De confirmarse la decisión, solicita **se revoque la condena por concepto de intereses moratorios**, al no haberse presentado mora, pues fue solo con la Sentencia que se reconoció la prestación económica.

Agotado el trámite procesal correspondiente a este tipo de procesos y sin que se aprecie causal alguna de nulidad que invalide la actuación, se procede a resolver el asunto de fondo, previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

La competencia de esta Corporación está dada por los puntos que son objeto de **Apelación** y se conocerá también en **Consulta** en favor de COLPENSIONES, de conformidad con lo establecido en los artículos 57 de la Ley 2ª de 1984, 15, 66 A y 69 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social; respectivamente; así como, Providencias de la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia STL-7382 del 9 de junio de 2015 Rad. 40200, AL469 del 3 de febrero de 2016 Rad. 71896, en ambas M.P. la doctora Clara Cecilia Dueñas Quevedo.

Conflicto Jurídico:

El conflicto jurídico a dirimir, consiste en determinar si hay lugar a revocar la condena por concepto de intereses moratorios. Se conocerá en Consulta en favor de COLPENSIONES, sobre los demás aspectos que fueron objeto de condena.

Encontrando esta Sala de Decisión Laboral procedente confirmar la decisión de Primera Instancia; por las siguientes razones:

Se revisa en Consulta la condena al reconocimiento y pago de la pensión especial de vejez por alto riesgo, conforme a lo establecido en el Decreto 2090 de 2003:

Conforme a lo establecido en el **Decreto 2090 de 2003** “*Por el cual se definen las actividades de alto riesgo para la salud del trabajador y se modifican y señalan las condiciones, requisitos y beneficios del régimen de pensiones de los trabajadores que laboran en dichas actividades*”, cuya vigencia fue ampliada hasta el 31 de diciembre de 2024 por disposición del Decreto 2655 del 17 de diciembre de 2014; se definen como **actividades de alto riesgo** para la salud del trabajador, entre otros, los **trabajos en minería que impliquen prestar el servicio en socavones o en subterráneos** (numeral 1º del artículo 2º). Para tener derecho a la pensión especial de vejez, **los afiliados que se dediquen en forma permanente al ejercicio de las actividades indicadas en el artículo anterior**, deben acreditar por lo menos 700 semanas continuas o discontinuas de cotización especial, superar la edad de 55 años y haber cotizado como mínimo las semanas exigidas por la Ley 797 de 2003; caso en el cual, la edad se disminuirá en un (1) año por cada (60) semanas de cotización especial, adicionales a las mínimas requeridas en el Sistema General de Pensiones, sin que pueda ser inferior a los 50 años (ver artículos 4º y 5º); con un régimen de transición cuyas condiciones se establecen en el artículo 6º.

En lo relativo a la prestación del servicio, se encuentra demostrado con la certificación del Liquidador de la sociedad Industrial Hulleras, según el cual, el señor Juan Bernardo Agudelo laboró desde el día 21 de febrero de 1984, hasta el 1º de junio de 1998, con un contrato de trabajo a término indefinido, desempeñándose desde su ingreso a la empresa en minería subterránea, en

labores en el tajo, con funciones de encapizar, palear y recuperar (folio 12); lo cual se corrobora con las declaraciones de los testigos Álvaro Hernán Restrepo Cano y Alberto de Jesús Betancur, quienes afirmaron que el demandante desempeñó dichas funciones en mina subterránea, en socavón.

Si bien es cierto, en el mencionado certificado existe una contradicción, consistente en que al final del documento quedó registrada una fecha diferente para el inicio de labores, porque en un párrafo dice desde el “21 de febrero de 1984” y en otro desde el “10 de febrero de 1992”, inconsistencia que advirtió la apoderada de Colpensiones en los alegatos de conclusión; también lo es, que analizada la prueba practicada en su conjunto, se puede concluir que el demandante si laboró en dicha actividad desde febrero de 1984; porque verificada la historia laboral expedida por Colpensiones actualizada el 13 de noviembre de 2016, el demandante registra afiliación y cotizaciones con Industrial Hulleras desde el 21 de febrero de 1984 hasta el 31 de mayo de mayo de 1998 (folios 21 a 33); lo que concuerda con el contenido del acta de audiencia de conciliación celebrada el día 8 de febrero de 2008 en la Dirección Territorial de Antioquia del Ministerio de la Protección Social, con el Representante Legal de Industrial Hulleras S.A. en Liquidación y con el apoderado especial de Cementos Argos S.A., donde quedó consignado que **ingresó a laborar el 20 de febrero de 1984** y que el empleador adeudaba las cotizaciones en seguridad social en pensiones con alto riesgo, las cuales se pagarían al entonces I.S.S., previa cuenta de cobro, por el periodo igual o equivalente a las causadas desde el día en que ingresó a laborar, hasta el momento de la terminación del contrato de trabajo el día 1º de junio de 1998, todas en alto riesgo. Así mismo, el apoderado de Cementos Argos S.A. indicó que las empresas por él representadas, se obligaban a pagar al I.S.S., el valor de las cotizaciones que por pensiones y en alto riesgo, adeudara Mineros Unidos S.A., hasta cuando el demandante laboró allí, esto es, el 4 de junio de 2002 (folios 34 a 40) y según historia laboral, presenta cotizaciones con Mineros Unidos S.A. entre el **1º de febrero de 1999 y el 30 de junio de 2002** (folios 21 a 33).

Aunque en la Sentencia de Primera Instancia no se hizo referencia al pago

de los aportes adicionales por la actividad de alto riesgo y en el expediente no hay constancia de haberse realizado el pago efectivo, conforme a lo acordado en el acta de conciliación aportada, ello no es impedimento para tener en cuenta ese tiempo como válido en la densidad de semanas, ya que la no realización de los aportes adicionales, no exonera a la entidad de seguridad social del reconocimiento del derecho pensional pretendido, siendo una obligación a cargo del empleador, cuyo incumplimiento no puede acarrear desmedro en los derechos pensionales del trabajador que prestó sus servicios en actividades de alto riesgo, ver **Sentencias SL1196 de 2020 Radicado 76191, SL1274 de 2019 Radicado 40567**. Así mismo, es válido tener en cuenta los periodos aportados en condición de alto riesgo anteriores a 1994, teniendo en cuenta que antes de ese año no existía la obligación de efectuar el aporte adicional, lo que surgió con la expedición del Decreto 1281 del 22 de junio 1994, ver **Sentencia SL999 de 2020 Rad. 67163**.

El demandante acredita **914 semanas de cotización especial** por actividades de alto riesgo, que superan las 700 exigidas en el Decreto 2090 de 2003 y **en total acredita 1705 semanas cotizadas** al Sistema General de Pensiones (se incluyen 1666.14 reconocidas en la historia laboral folio 25 y 39.28 semanas por periodos registrados en forma incompleta con la observación *pago aplicado a periodos anteriores* lo que implica una mora y no hay lugar a descontar esos días, sin que la entidad hubiera demostrado que adelantó las acciones de cobro correspondientes), cumpliendo también el requisito de semanas exigido en la Ley 797 de 2003. **La edad de 55 años la alcanzó el 1º de julio de 2017**, al haber nacido el mismo día y mes de 1962 (Registro civil de nacimiento folio 18).

Es de anotarse que el Juzgado contabilizó 941 semanas de cotización especial y por ello, consideró procedente descontar cuatro (4) años para que el actor disfrute de la prestación a partir del 1º de julio de 2013, cuando cumplió 51 años de edad, por contar con 240 semanas adicionales a las 700 de cotización especial exigidas; por efectos del fenómeno jurídico de la prescripción, ordenó el reconocimiento a partir del 18 de julio del año 2014, teniendo en cuenta la reclamación

administrativa presentada el mismo día y mes de 2017 (folio 50). Debiéndose aclarar que, **la edad para el reconocimiento de la pensión especial reclamada, se disminuye en un año por cada 60 semanas adicionales a las mínimas requeridas en el Sistema General de Pensiones (SGP)**, esto es, adicionales a las 1300 exigidas en la Ley 797 de 2003, no a las 700 exigidas en el Decreto 2090 de 2003; no obstante, analizado el caso, no hay lugar a modificación alguna, porque el demandante cuenta con 405 semanas adicionales a las 1300 exigidas en la Ley 797 de 2003, tendría derecho a descontar el máximo de cinco (5) años, para disfrutar la prestación a partir del cumplimiento de los 50 años de edad, es decir, desde el 1º de julio de 2012, siempre que no hubiera operado prescripción sobre mesadas y en este caso están afectadas por prescripción las mesadas causadas antes del 18 de julio de 2014.

Siendo procedente la orden impuesta a COLPENSIONES, de calcular el ingreso base de liquidación y el valor de la mesada pensional, conforme a lo establecido en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, con el promedio de lo cotizado en los últimos diez (10) años o en toda la vida laboral, la que sea más favorable, al que deberá aplicar la fórmula establecida en el artículo 34 de la Ley 100 de 1993 para obtener el valor de la mesada pensional; con 13 mesadas al año, tal como lo indicó el *a quo*.

En cuanto a que se revoque la condena por concepto de intereses moratorios, afirmando el apoderado de COLPENSIONES que mal haría la entidad en reconocer una pensión que no se había causado, que actuó de buena fe y conforme a derecho:

No le asiste razón al recurrente, toda vez que de conformidad con lo establecido en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, los intereses moratorios son procedentes cuando la entidad incurre en mora en el pago de mesadas pensionales, causados a partir del vencimiento de los cuatro (4) meses con que contaba para

resolver, contados desde la fecha de la reclamación presentada con los requisitos exigidos; tal como quedó demostrado en este caso, pues **para el 18 de julio de 2017, cuando el demandante radicó la petición de reconocimiento, tenía cumplidos los requisitos de edad y semanas especiales de cotización especial por alto riesgo;** sin que sea admisible lo afirmado en el recurso, esto es, que era necesaria la realización de audiencia judicial para verificar la real prestación del servicio en minería de socavón, lo cual pudo corroborar la entidad de seguridad social en investigación administrativa y está acreditado en el proceso con la prueba practicada. Así mismo, los intereses moratorios proceden independiente de la buena o mala fe en el comportamiento de la entidad de seguridad social, por cuanto se trata del resarcimiento económico dirigido a reducir los efectos adversos causados al demandante, por la mora de la entidad de seguridad social en el cumplimiento de sus obligaciones; al respecto ver **Sentencias SL1576 de 2020 Radicado 75381 y SL7893 de 2015 Radicado 41209** donde la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia, trató el caso particular de pensión especial de vejez reconocida con Decreto 2090 de 2003, indicando que los intereses moratorios tienen carácter resarcitorio y no sancionatorio.

Siendo procedente la imposición de la condena por este concepto, a partir del 18 de noviembre de 2017, cuando venció el plazo de cuatro (4) meses para resolver y sobre las mesadas pensionales reconocidas, hasta la fecha del pago efectivo de la obligación; tal como lo ordenó el Juzgado de Primera Instancia.

Así las cosas, **esta Sala de Decisión Laboral encuentra procedente, confirmar la Sentencia de Primera Instancia,** incluyendo lo relativo a la condena en Costas.

COSTAS:

Se condenará en costas en esta Segunda Instancia a cargo de COLPENSIONES, al no haber prosperado el recurso de Apelación formulado; fijándose como agencias en derecho un SMLMV equivalente \$877.803,00, a favor del demandante. Lo anterior, conforme a lo establecido en el artículo 365 del Código General del Proceso y el Acuerdo 10554 de 2016 expedido por el Consejo Superior de la Judicatura.

DECISIÓN:

En mérito de lo expuesto, **EL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO: Se CONFIRMA la Sentencia de Primera Instancia, de la fecha y procedencia conocidas, que se revisa por vía de **Apelación** y en el grado jurisdiccional de **Consulta** en favor de **COLPENSIONES**; de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de esta Sentencia.

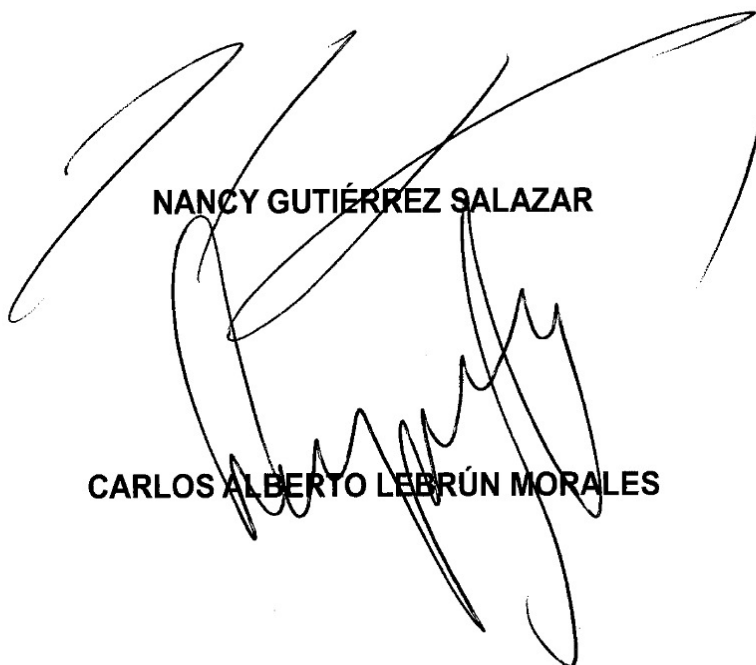
SEGUNDO: Se CONDENA en Costas en esta Segunda Instancia a cargo de **COLPENSIONES**, fijándose como agencias en derecho un SMLMV equivalente a la suma de **OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS M/L (\$877.803,00)**, favor del demandante **JUAN BERNARDO AGUDELO**; según lo explicado en la parte considerativa.

TERCERO: Lo resuelto se notifica en **ESTADOS** (electrónicos de que trata el artículo 9º del Decreto Legislativo 806 de 2020) y se ordena devolver el proceso al Despacho de origen. En constancia se firma el Acta por quienes en ella intervinieron.

Los Magistrados,



MARÍA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ



NANCY GUTIÉRREZ SALAZAR

CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES

**EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL
SUPERIOR DE MEDELLÍN – SALA LABORAL -
HACE CONSTAR**

Que la presente providencia se notificó por
estados N ° 190 del 10 de diciembre de 2020

consultable aquí:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/100>